

Estrategias opositoras para frenar las reformas político-electorales: acciones institucionales, alianzas y redes sociales de feministas y grupos en situación de discriminación

Esperanza Palma¹ y Marisol Vázquez²

Planteamiento del problema

Entre 2022 y 2023 se presentaron en México tres propuestas de reforma al sistema electoral, a la organización y funciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La primera consistió en una reforma constitucional presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual proponía entre otros temas, modificar la composición y forma de elección de los integrantes del órgano encargado de organizar las elecciones, el INE. En tanto dicha reforma no alcanzó la mayoría calificada en la cámara baja, el ejecutivo envió otra iniciativa presidencial para modificar las leyes secundarias, la cual fue conocida como “plan b”, cuyo objetivo era reducir la capacidad administrativa del INE y limitar las cuotas en candidaturas para los grupos en situación de discriminación.

El “plan b”, consistente en dos partes, fue aprobado por la mayoría morenista y sus partidos aliados en el Congreso. Una vez publicadas estas reformas en el Diario Oficial de la Federación se promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) más de 100 controversias constitucionales, así como diversas acciones de inconstitucionalidad para revertir sus efectos. Después de un análisis, la Corte declaró que las dos partes del “plan b” eran inconstitucionales por claras violaciones al proceso legislativo (SCJN, 2023).

De manera sorprendente y después de meses de conflictos agudos entre oficialismo y oposiciones en torno a las reformas mencionadas, en abril de 2023, algunos integrantes de la coalición oficialista y de los partidos opositores impulsaron una reforma constitucional para limitar las facultades del TEPJF, entre ellas la facultad de interpretación que ha sido crucial para avanzar en la defensa de los derechos políticos y electorales de las mujeres, esta última reforma fue detenida en comisiones por la alianza amplia de mujeres congresistas,

¹ Profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la UAM-A

² Subdirectora de investigación y formación en la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación del INE

diputadas electas por acciones afirmativas y organizaciones de la sociedad civil como Mujeres en Plural, Nosotras tenemos Otros datos, la Observatoria Feminista y 50+1, Marea Rosa, Colectivos de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes y el Movimiento de Personas con Discapacidad, entre otras, que se habían opuesto también al “plan b”.

Si bien, en las declaraciones oficiales y en la exposición de motivos se justificaban las primeras dos reformas bajo el argumento del ahorro de recursos y la instauración de una democracia plena “libre de fraudes electorales” y sin la injerencia de la supuesta “parcialidad de las instituciones encargadas de la organización electoral e impartición de la justicia”, lo cierto es que se trató de reformas paradigmáticas de erosión democrática que impactaban el funcionamiento de las instituciones electorales, tanto las administrativas como las jurisdiccionales como defensoras de derechos de las mujeres y grupos en situación de discriminación y, por ello, activaron un mapa complejo de oposiciones partidistas y no partidistas. En este periodo se organizaron marchas masivas para defender al INE, hubo un gran impacto en redes sociales con el hashtag #ElINENoSeToca y la consigna “el INE no se toca y el TEPJF tampoco”, así como estrategias realizadas por las colectivas quienes se movilizaron y articularon un movimiento de oposición dentro del congreso para detener la iniciativa presentada por sus propios grupos parlamentarios, todos hay que decirlo coordinados por hombres legisladores.

Este capítulo se propone analizar los mecanismos, pesos y contrapesos que se activaron en cada intento de reforma para detener los cambios al sistema electoral, al INE y al TEPJF, así como la forma en la cual las mujeres congresistas, las colectivas y los grupos en situación de discriminación se opusieron a los cambios que suponían una reducción de las cuotas y acotaban el sentido interpretativo del TEPJF el cual ha sido clave para avanzar en la protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres (Aguilar, 2022), para ello revisamos documentos oficiales y realizamos entrevistas a profundidad a mujeres integrantes de Mujeres en Plural y a una diputada federal integrante de la presente legislatura.

La erosión democrática ocurre una vez que se establecen medidas que limitan el control de la ciudadanía y la rendición de cuentas y se produce un retroceso público cuando quienes están en el poder aprueban leyes o promueven acciones que aumentan su capacidad de actuar de forma discrecional. No obstante, estos procesos de erosión democrática y de polarización activan actores, generan reacciones, resistencias y resiliencias opositoras

(Gamboa, 2022; Pérez Liñán y Pagés, 2021; Przeworski, 2019; Somer, McCoy y Luke, 2021). En este sentido, las iniciativas de reforma referidas anteriormente han generado movilizaciones y resistencias. Así, aunque la justificación de la propuesta del “plan b” indica que se garantiza “el cumplimiento del principio de paridad en los órganos colegiados y unipersonales, respetando el principio de autodeterminación de los partidos políticos” y “garantiza la representación de grupos vulnerables mediante acciones afirmativas para candidaturas de personas jóvenes, indígenas, afromexicanas, personas de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados” (Gaceta Parlamentaria, 2022), en realidad esta reforma erosiona tanto la aplicación de la paridad como las cuotas establecidas para diferentes grupos en situación de discriminación. Lo mismo ocurre con la iniciativa de reforma de reforma al TEPJF. Las propuestas del oficialismo pueden interpretarse como “Genderwashing”, esto es, como un uso estratégico del género para los fines del grupo gobernante (del autócrata) consistentes en erosionar los pesos y contrapesos y aumentar su poder (Bjarnegård y Zetterberg, 2023).

Acorde con lo anterior, la tesis de este escrito es que en este proceso —reformas vs resiliencia opositora— se pusieron en juego dos modelos de autoridad electoral e impartición de justicia: uno, el vigente, que pone mayor peso en la intervención de las autoridades electorales para tutelar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía y el otro que discursivamente privilegia la autonomía de los partidos políticos, pero que en realidad, se propone limitar la intervención del INE y del TEPJF en el ejercicio democrático, particularmente en los derechos político-electorales, ya sea para los procesos de selección de candidaturas o el cumplimiento de la paridad.

El análisis de estos procesos pone en evidencia que en los casos de las reformas electorales, ambas originadas en el Ejecutivo, las y los diputados de acción afirmativa del bloque oficialista mantuvieron la disciplina y votaron a favor de una ley que reducía las cuotas para sus candidaturas. En contraste, la iniciativa de reforma al TEPJF promovida por seis de la siete bancadas en la cámara baja —con la que se pretendía que fuera facultad exclusiva del Congreso la aprobación de medidas de acción afirmativa y paridad en el acceso a espacios de representación—, activó la oposición de diputaciones de acción afirmativa de MORENA y generó alianzas intrapartidistas para echarla abajo, lo cual se logró gracias al

cabildeo de organizaciones feministas quienes expusieron los riesgos a la democracia si se lograba su aprobación.

Puede plantearse como hipótesis que las distintas respuestas a las tres reformas se explican por el origen de quién las presenta: en el caso de la reforma al TEPJF, no era una iniciativa del ejecutivo sino de los grupos parlamentarios y fue respaldada por los partidos opositores, excepto Movimiento Ciudadano (MC)³, lo cual abrió un espacio político para que feministas y diputaciones de acción afirmativa se posicionaran públicamente en contra de la reforma y se movilizaran dentro del congreso, como fue el caso de las diputadas morenistas Salma Luévano y María Clemente García (cuota trans), así como de la diputada Irma Juan Carlos (cuota indígena), además de colectivas como Mujeres en Plural quienes tuvieron un papel fundamental como oposición a estos cambios.

Los intentos de reformas electoral y sus consecuencias para la democracia mexicana

De acuerdo al debate académico, las reformas electorales responden a diferentes motivaciones de las élites políticas, entre las que se encuentran los intereses de poder (seguir ganando y expandirse) y/o valores (incluyendo visiones de la representación y de la gobernabilidad) (Renwick, 2010; Zovatto, 2018; Freidenberg y Dosek, 2022). Algunas élites se proponen cambiar las reglas como respuesta a problemas políticos, como una forma de negociar con grupos opositores a cambio de otras reformas o como respuesta a demandas de grupos excluidos que buscan su incorporación y la ampliación de sus derechos.

Las reformas electorales propuestas en 2022 por el Presidente López Obrador, apoyado por MORENA y sus partidos aliados, no respondían a demandas de grupos de la ciudadanía, ni buscaban expandir derechos; tampoco tenían la intención de incentivar la democratización y una mayor rendición de cuentas de los partidos políticos. Adicionalmente, no fueron resultado de la deliberación o negociación con los actores afectados por los cambios, tal como lo dejó ver la propia declaración de inconstitucionalidad hecha por la SCJN. Las propuestas están enmarcadas en una visión particular del orden político de la coalición gobernante que se alimenta de conflictos de coyuntura entre el ejecutivo federal, el

³ En junio de 2022 el TEPJF ordenó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión otorgaran un puesto al partido Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente al ser excluidos por una decisión de las propias bancadas. Es por ello por lo que no respaldó la iniciativa de reforma.

INE, el TEPJF y los partidos de oposición, agudizados por la exigencia del cumplimiento de la paridad en las gubernaturas desde el proceso electoral de 2021 y de la elección de una mujer como presidenta del INE, ante la ausencia histórica de mujeres en ese cargo desde la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Uno de los aspectos medulares tanto de la reforma constitucional como del “plan b” fue la reestructuración del INE. La reforma proponía reducir su estructura y presupuesto además de afectar las facultades para la organización de las elecciones y que quienes integran el Consejo General fueran electos por voto popular, lo cual iba en contra de la ciudadanización de dicha institución y del largo camino para lograr su autonomía. La reforma también limitaba la capacidad de intervención del INE y del TEPJF en la interpretación amplia de la protección de derechos políticos y con ello, limitaba el papel que estas instituciones han jugado en la defensa y tutelaje de los derechos de las militancias partidistas, particularmente los derechos políticos y electorales de las mujeres y de los grupos en situación de discriminación, además reducir las postulaciones (cuotas de candidaturas) de estos últimos. En otras palabras, ponía en cuestión la integridad electoral y el principio de certeza jurídica. En palabras de Patricia Olamendi (En entrevista con la autora el 18 de agosto de 2023), estas tres reformas no eran cualquier tipo de reformas; violaban el Artículo 1 de la Constitución que es el principio protector de los derechos humanos y del cual derivan las acciones afirmativas.

En los siguientes apartados se desarrolla de manera general los principales temas de cada una de las tres propuestas, la forma en la cual erosionaban la democracia y las respuestas de actores de oposición.

Plan A. Reforma Constitucional en materia electoral

La propuesta de reforma Constitucional fue presentada a la cámara de diputados y diputadas por el Ejecutivo Federal en abril de 2022 y contempló la modificación de 18 artículos de la Constitución y siete transitorios (Presidencia , 2022). En el siguiente cuadro se realiza un análisis de los temas más relevantes de la reforma, así como su posible efecto de erosión de la democracia.

Cuadro 1. La reforma constitucional en materia electoral

Tema	Antes de la reforma	Después de la Reforma	¿Erosión democrática?
INE	11 Consejerías electas por un Comité Técnico y la Cámara de Diputados.	Siete Consejerías electas por voto popular.	Sí, se removerían a las consejerías que han sido críticas con las propuestas del presidente y se promovería una contienda desigual en la elección popular de dichas figuras. La propuesta no garantiza la independencia de las personas electas como Consejeras (os) electorales.
TEPJF	Magistraturas electas por el Senado	Magistraturas electas por voto popular	Sí, se promovería una contienda desigual en la elección popular, ello no garantiza la independencia de las personas electas.
Tribunales Electorales y Organismos Públicos Locales		Desaparición de ambas instituciones	Sí, es un atentado contra la democracia local, el INE no podría asumir las funciones de los OPL lo que debilitaría a la institución federal.
Diputaciones	500 diputaciones, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional	Se eliminan 200 y quedan 300 electas mediante el sistema de listas votadas en cada entidad federativa	No, porque a cada partido correspondería un número de curules de acuerdo a la votación obtenida en cada entidad
Senadurías	128 senadurías	96 senadurías	Sí, elimina la RP que es la forma en la cual se garantiza la participación de minorías en el órgano de representación.
Voto electrónico	No se contempla	Se implementa	No, contribuye a facilitar el voto en México.

Fuente: Elaboración propia con base en <https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ASS-11-22.pdf>

La reforma Constitucional no logró la mayoría calificada que exige la modificación a la Carta Magna: en la votación del 6 de diciembre de 2022 hubo 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención. Los votos a favor fueron de Morena (198), PVEM (40) y PT (31), es decir, del partido en el gobierno y de los partidos aliados, mientras que PAN (115), PRI (69), MC

(25) y PRD (15) votaron en contra (Ver cuadro 2). Es importante mencionar que Adela Ramos, fue la única diputada de Morena que votó en contra del proyecto y denunció amenazas por parte del coordinador parlamentario quien creó una campaña de odio en su contra por no acompañar la propuesta (El Financiero, 2022). El diputado de Morena Carlos Noriega Romero se abstuvo de votar, pero no se encontraron notas periodísticas referentes a algún costo político por ello, con lo cual, se puede corroborar que existe un costo diferenciado para la “rebeldía” de las mujeres en los partidos políticos. La reforma constitucional antes mencionada fue detenida por un escenario de gobierno dividido, es decir, el partido del ejecutivo federal (Morena) no tiene mayoría en el Congreso, lo que en este caso resultó ser un contrapeso decisivo para evitar dichos cambios cuyo hubiera sido la erosión democrática.

Cuadro 2. Votación en la Cámara de diputados y diputadas de la reforma constitucional en materia electoral presentada por el Ejecutivo Federal (6 de diciembre de 2022)

Votos	Total	MRN	PAN	PRI	PVEM	PT	MC	PRD
Favor	269	198	0	0	40	31	0	0
Contra	225	1	115	69	0	0	25	15
Abstención	1	1	0	0	0	0	0	0
Quórum*	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausente	5	2	0	0	1	2	0	0
Total	500	202	115	69	41	33	25	15

*Pasó lista de asistencia y no votó

Fuente: Gaceta Diputados, LXV Legislatura. Disponible en:

<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/65/tabla2or1-113.php3>

“Plan b”. Reforma a leyes secundarias en materia electoral

Dado que no se aprobó la reforma Constitucional, el Ejecutivo presentó el llamado “plan b”, el cual consistió en la modificación de seis leyes secundarias en materia electoral⁴; a diferencia de la reforma constitucional sólo necesitaba la mayoría simple para su aprobación, la cual se logró con los votos de Morena y los partidos aliados (PVEM y PT). Se aprobaron modificaciones a la Ley General de Comunicación Social, y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y posteriormente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. La reforma fue aprobada por mayoría simple con el voto a favor de todo el bloque oficialista y el voto en contra de todas las bancadas de oposición, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 3. Votación en la Cámara de diputados y diputadas del “plan b” en materia electoral presentada por el Ejecutivo Federal (aprobada el 6 de diciembre de 2022)

Votos	Total	MRN	PAN	PRI	PVEM	PT	MC	PRD
Favor	267	196	0	0	38	33	0	0
Contra	219	0	114	68	0	0	23	14
Abstención	0	0	0	0	0	0	0	0
Quórum	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausente	14	6	1	0	3	0	2	1
Total	500	202	115	69	41	33	25	15

Fuente: Fuente: Gaceta Diputados, LXV Legislatura. Disponible en:

<http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/65/tabla2or1-113.php3>

⁴Éstas fueron: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Federal de Consulta Popular y la Ley General de Comunicación Social.

En el Senado, la votación de la segunda parte del “plan b” que tocaba los temas electorales se realizó el 22 de febrero de 2023 con un total de 70 votos a favor y 50 en contra (Senado, 2023); se hicieron diferentes modificaciones al dictamen de la cámara de diputados y se hizo el envío al Ejecutivo Federal quien el 2 de marzo de 2023 publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto aprobado. En la tabla 4 se hace un análisis de los temas que tocó esta propuesta y su impacto en el funcionamiento democrático. De la bancada de MORENA, solamente Ricardo Monreal y Rafael Espino votaron en contra al considerar que las iniciativas violaban algunos artículos de la Constitución Política.

Los cambios incluidos en esta reforma, que el oficialismo destacó como avances fueron el voto en prisión preventiva, el voto anticipado para personas en estado de postración, el voto por internet para residentes en el extranjero y las acciones afirmativas para grupos en situación de discriminación. Sin embargo, de la mano de estos cambios que garantizaban en la ley electoral derechos ya ganados previamente por los acuerdos y sentencias tanto del INE como del TEPJJ, se propusieron limitaciones en las funciones de ambas instituciones para garantizar los derechos políticos y electorales (Gaceta Parlamentaria, 2022).

El siguiente cuadro se centra únicamente en estos temas por ser el objeto del presente capítulo y dada la enorme cantidad de artículos reformados que incluyen la reestructuración del INE, las juntas ejecutivas distritales, el servicio profesional de carrera, la reestructuración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), la disminución de recursos para capacitación, la posible desaparición de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, libertad para la propaganda gubernamental, entre otros.

Cuadro 4. Reforma electoral a leyes secundarias “plan b”

Tema	Antes de la reforma	Después de la Reforma	¿Erosión democrática?
Derechos políticos y electorales: Voto en prisión preventiva, voto anticipado, voto por internet para residentes en el extranjero	Ya existían LGIPE, arts.1 y 5. Ley General para la inclusión de personas con discapacidad, Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y Pacto internacional de derechos políticos y civiles. Ya los aplicaba el INE: Programa para voto con personas con discapacidad en Coahuila y Edomex	Modificación al Artículo 114: se faculta al INE para generar un mecanismo para el voto anticipado aunque no prevé un censo permanente de personas con discapacidad. Art. 135 garantiza voto en el extranjero. Artículo 282 Bis mandata a llevar elecciones a centros penitenciarios para personas que aún no tienen una sentencia y están en prisión preventiva	No, garantiza los derechos cuyo antecedente eran lineamientos que ya había generado el INE en elecciones previas.
Facultades y competencia del INE, los OPLES y el Tribunal	Artículo 5 La aplicación de la ley corresponde, en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, al Tribunal Electoral, a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados/as y a la Cámara de Senadores/as del Congreso de la Unión.	Artículo 5 de LGIPE Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, no podrán condicionar el ejercicio de derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía solicitando mayores requisitos que los que determina la Constitución y esta ley Artículo 7 En ningún caso se podrán suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía con sanciones administrativas o judiciales distintas a las penales.	Sí, limita las actuaciones del INE y al TEPJF para la vigilancia de la paridad, la 3 de 3 contra la violencia; imprecisión en cuanto a las listas. Sí, permite a las dirigencias de los partidos y grupos internos de poder decidir discrecionalmente sobre candidaturas y derechos de la militancia.

		<p>Artículo 11 LEGIPE “Es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir mediante el proceso legislativo establecido en la Constitución, las normas que regulen el proceso de postulación de candidaturas, lo cual constituye la reserva de dicha materia, que no podrá ser regulada, contrariada o modificada por otras de carácter secundario como acuerdos, lineamientos o reglamentos que por jerarquía normativa se encuentren subordinados a la ley”.</p> <p>Artículo 11Bis Las autoridades electorales solo podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos para efecto de reposición de procedimientos por violaciones a su normativa interna o a derechos de la ciudadanía. En ningún caso podrán resolver nombrando dirigentes y candidatos o determinando cualquier acto que interfiera en forma directa en las decisiones de la vida interna de los partidos.</p> <p>La postulación paritaria en las gubernaturas</p>	<p>Sí, ambigüedad en el mandato de la paridad en gubernaturas. No existen ciclos en la organización de las elecciones. Es una estrategia de “Genderwashing” frente a la movilización feminista de 2021 por la paridad en gubernaturas.</p>
--	--	---	--

		aplicará en cada “ciclo” electoral de renovación de las gubernaturas en el país (artículo 11 Bis de la LEGIPE). En el ciclo correspondiente al menos 16 postulaciones serán para mujeres.	
--	--	---	--

Fuentes: Elaboración propia con base en (1) Resumen-ejecutivo-implicaciones-reforma-electoral-1.pdf. (2) Para el tema de derechos político-electorales, Beltrán, Yuri, 2023. <https://www.revistabrujula.org/b146-plan-b-enfoque-desde-linclusion>, (3) Mujeres en Plural.

Lo que interesa destacar es cómo esta segunda propuesta de reforma del Ejecutivo se proponía modificar las acciones afirmativas y la paridad e incluso se ponía entredicho la posible aplicación de la medida 3 de 3 contra la violencia de género, ello bajo el argumento de la autonomía de los partidos. Cabe recordar que el INE aprobó acciones afirmativas en la elección federal de 2021 para cinco grupos en situación de discriminación (Lineamientos del INE en acatamiento a dos sentencias: SUP-RAP-121/2020 SUP-RAP-21/2021) (Cuadro 5). Estas medidas fueron generadas por la autoridad electoral como resultado de sentencias, muchas de ellas, y de demandas de grupos en situación de discriminación que están subrepresentados en el Congreso.

Cuadro 5. Acciones afirmativas implementadas a nivel federal de 2021 y modificaciones del “plan b”

Grupos en situación de discriminación	Fórmulas obligatorias en la elección federal de 2021	“plan b” LGIPE, Art. 11
Indígenas	30	Al menos 25 postulaciones para todos los grupos, incluyendo jóvenes
Con discapacidad	8	
Afromexicanos/as	4	
Diversidad Sexual	3	
Migrantes y residentes en el extranjero	5	
Total	50	25
Postulaciones	MR: Indígenas en distritos indígenas. R.P. en los primeros 10 lugares de las listas, cumpliendo con la paridad,	MR: En cualquier distrito. R.P. en los primeros 20 lugares. El INE ya no podrá especificar lugares.

	al igual que las postulaciones de mayoría	
--	---	--

Fuente: Mujeres en Plural.

Gracias a estas medidas implementadas en la elección de 2021, 65 personas de dichos grupos llegaron al Congreso para integrar la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados/as (2021-2024) denominada la legislatura de la paridad y la inclusión; las persona que entraron por cuotas representaron el 13% del total de las curules⁵. En este contexto, una de las preguntas obligadas es qué posición tomaron frente a esta propuesta las personas representantes de acción afirmativa de MORENA quienes, es importante señalar, eran la mayoría de representantes que entraron a al Congreso con estas cuotas (32 de los 65 espacios de acción afirmativa). Gracias a las declaraciones en tribuna y las notas de prensa, se puede observar que sí hubo voces morenistas discordantes; por ejemplo la diputada trans Salma Luévano presentó una reserva e hizo pública su molestia con su partido. La reserva fue rechazada por mayoría económica (El Universal, 2022).

Fuera del campo oficialista, el “plan b” movilizó en su contra a una diversidad de actores que incluyeron al propio INE, a los partidos de oposición, organizaciones ciudadanas como el Frente Cívico Nacional, a organizaciones feministas que presentaron diversas acciones de inconstitucionalidad y Amicus Curiae firmado por cientos de organizaciones feministas federales y locales⁶, así como a los grupos que han conseguido la aprobación de acciones afirmativas en candidaturas⁷: migrantes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, indígenas y afromexicanas. Estos actores, como el “Movimiento de personas con discapacidad”, recurrieron al litigio estratégico⁸ y a una movilización para detener la reforma.⁹ Finalmente, el 9 de mayo y 22 de junio de 2023, la Suprema Corte de

⁵ Para un análisis de la efectividad de las medidas ver el estudio del Colegio de México, https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-01-05-1/assets/documentos/ColMex_20230105.pdf

⁶ Dato proporcionado por Patricia Olamendi en entrevista para este estudio el 18 de agosto de 2023.

⁷ Colectivos feministas en alianza con el PRD presentan acción de inconstitucionalidad <https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/presentaran-prd-y-organizaciones-feministas-una-accion-de-inconstitucional-contr-el-plan-b-electoral->

⁸ El INE impugnó la reforma <https://elpais.com/mexico/2023-02-02/el-ine-impugna-ante-la-suprema-corte-el-plan-b-de-la-reforma-electoral-de-lopez-obrador.html>

⁹ <https://www.yotambien.mx/actualidad/impugnar-el-plan-b-por-falta-de-candidaturas-para-grupos-vulnerables/>
<https://www.yotambien.mx/actualidad/derechos-politicos-para-personas-con-discapacidad-laura-correa-de-la-torre/>

Justicia de la Nación invalidó la primera y segunda parte del “plan b”, dejando así sin efectos lo aprobado por el Congreso.

Por estas razones, el proceso que desencadenó el “plan b” es un ejemplo importante de resiliencia opositora en contextos de autocratización. A diferencia de otros casos de erosión democrática, en México las oposiciones tienen a su favor el hecho de que la Suprema Corte se mantiene independiente —a pesar de las presiones del oficialismo—y, en este sentido, funciona como mecanismo de control horizontal (Boese, et. Al., 2021). Las votaciones de ambos proyectos fueron en la SCJN fueron nueve votos a favor de la anulación y dos en contra de las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel quienes fueron propuestas por Andrés Manuel López Obrador (El País, 2023).

La iniciativa de reforma al TEPJF y la rebeldía al interior de los partidos

La última reforma fue presentada en abril de 2023 por parte de los coordinadores parlamentarios — todos hombres — de seis de los siete partidos políticos nacionales: Morena, PRI, PAN, PVEM, PT y PRD, sólo MC se manifestó en contra. El objetivo era limitar las facultades interpretativas del TEPJF respecto a las decisiones del Congreso y la vida interna de los partidos políticos. Como antecedente debemos recordar que el TEPJF había obligado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión incluir al partido MC en esa Comisión, conforme al principio de máxima representación efectiva; también había obligado a la cámara de diputados a tener una quinteta con solo mujeres para la presidencia del Consejo General del INE y mandató a través de diferentes sentencias acciones afirmativas para candidaturas de diferentes grupos en las elecciones federales de 2021. Todas estas decisiones que protegieron los derechos de la ciudadanía, de las militancias, de la paridad, y ampliaron la representación de diferentes grupos en el Congreso, no fueron bien vistas por los legisladores quienes manifestaron que se trataba de intromisiones a su normatividad interna y a la división de poderes y competencias entre poderes.

La reforma al TEPJF se presentó de manera distinta al de las reformas electorales que habían sido propuestas por el ejecutivo federal, ya que esta fue planeada por los

coordinadores parlamentarios¹⁰. Produjo una rebelión en el Congreso y en la redes sociales por parte de legisladoras, diputaciones de acciones afirmativas de MORENA y de otros partidos y nuevamente por las colectivas feministas. La propuesta se proponía modificar los Artículo 41, 73, 99 y 105 de la Constitución en materia de la protección de derechos políticos y electorales. El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales se aplazó en más de cuatro ocasiones (Expansión, 2023) y finalmente, ante la oposición, nunca pasó al pleno.

La propuesta proponía “...revisar y proponer modificaciones legislativas al marco jurídico de las atribuciones del TEPJF”, con el argumento de que este tribunal rebasó reiteradamente “las esferas de su competencia al invadir las competencias del poder Legislativo, lo que supone una alteración del principio de división de poderes” (Martínez López y Frías Flores, 2023). Se proponía limitar la actuación del tribunal supuestamente conforme a lo que dicta la Constitución para otorgar facultad exclusiva del Congreso la aprobación de medidas afirmativas. Entre las propuestas de cambios se encontraban las presentadas en el cuadro 6:

Cuadro 6. Propuesta de reforma Constitucional al TEPJF

Tema	Antes de la reforma	Después de la Reforma	¿Erosión democrática?
Acciones Afirmativas	El TEPJF había emitido sentencias para reconocer cuotas en candidaturas a diputaciones federal para grupos en situación de discriminación lo que dio pie a que 65 fueran electas en la legislatura (201-2023)	Someter las acciones afirmativas al límite de la ley (Art. 41)	Sí, se pretende limitar la actuación del poder jurisdiccional en el reconocimiento de los derechos políticos y electorales
Paridad	El TEPJF había emitido sentencias y para respetar la paridad como principio constitucional, por ejemplo la que garantiza la paridad en gubernaturas.	Limitar la judicialización de los asuntos internos de los partidos concediéndoles amplias facultades para garantizar la paridad de género en el ejercicio de su autodeterminación y autoorganización (Art. 41)	Sí, se pretende limitar la actuación del poder jurisdiccional al exigir paridad como principio que deben respetar los partidos políticos.
Interpretación de la ley	El TEPJF como integrante del poder judicial hace interpretación de las leyes y	Circunscribir la competencia del TEPJF a controversias	Sí, se limita la actuación de un poder y la superioridad de

¹⁰ Rubén Moreira (PRI), Ignacio Mier (Morena), Jorge Romero (PAN), Carlos Puente (PVEM), Alberto Anaya (PT), Luis Espinosa (PRD).

	sus sentencias han permitido desde hacer valer las cuotas para mujeres, (Sentencia 12624) hasta garantizar la paridad en la integración de órganos de gobierno.	reguladas únicamente por leyes electorales (Art.99) . Limitar las resoluciones del TEPJF al tenor literal de la ley (Art. 99)	decisiones de los partidos políticos.
--	---	---	---------------------------------------

Fuentes: Elaboración propia con base en Gama (2023) y Martínez y Frías (2023)

La intención política detrás de esta iniciativa era limitar la intervención del TEPJF en los asuntos internos de los partidos y limitar sus facultades para fijar medidas de acción afirmativa y hacer efectiva la paridad y, en los hechos, dejarlas en manos de las cúpulas partidistas bajo los supuestos (falsos, por lo demás) de respeto a la división de poderes y la autonomía de los partidos. El argumento es, de hecho, anticonstitucional ya que los partidos son entidades de interés público, sostenidos con dinero público y, por tanto, sujetos a mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia, cuyas acciones deben estar sometidas a la capacidad interpretativa del TEPJF.

Así, la reforma del tribunal representaba una verdadera contra reforma que ponía en cuestión los avances en materia de paridad y acciones afirmativas que gracias al movimiento feminista y el activismo de los grupos en situación de discriminación, derivaron en lineamientos de paridad en gubernaturas y acciones afirmativas en 2021.

Lo interesante del proceso es que mientras se trataba de avanzar en el dictamen, legisladores/as de las cuotas fueron sumando firmas para detener la iniciativa. Las diputadas trans de MORENA, Salma Luévano y María Clemente García, consideraron hipócrita y regresiva la propuesta y expresaron su oposición a que se dejara como facultad exclusiva del poder legislativo la aprobación de medidas de acción afirmativa. De manera interesante usaron el hashtag #ELTEPJFNoSeToca (emulando el opositor “ElINENoSeToca”) al considerar que el Tribunal Electoral es un aliado de los grupos en situación de vulnerabilidad y que la reforma buscaba que es esta institución ya no pudiera emitir sentencias progresivas en materia de inclusión. “Los partidos han hecho pura simulación” (aunque se vieron forzadas a reconocer los esfuerzos de MORENA por enarbolar las demandas de estos grupos). Las diputadas Luévano y Clemente hicieron un llamado a las y los representantes de acción afirmativa a oponerse a la reforma (Dina, 2023). También fue relevante la actuación de la diputada indígena de Morena Irma Juan Carlos y el diputado del PRI Sergio

Peñaloza, propuesto por la cuota afromexicana, quienes también usaron la tribuna para manifestarse en contra de la reforma constitucional. No menos importante, como ocurrió en el caso del “plan b”, organizaciones de grupos en situación de discriminación se manifestaron públicamente, como fue el caso del “Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes” (COLEFOM), quienes lanzaron un manifiesto en el que explicaban detalladamente porqué se oponían a la propuesta de reforma que estaba en la comisión de puntos constitucionales que dañaba los derechos políticos de las personas migrantes (COLEFOM, 2023).

A esas voces se sumaron la de la Magistrada del TEPJF, Janine Otálora quien planteó que “Los desacuerdos entre los órganos del Estado jamás pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de todas las personas ni para privarles de oportunidades para defenderlos...” “La responsabilidad pública que nos exige la Constitución no es la de imponer una visión ideológica, sino la defender las libertades que nos permiten convivir en sociedades diversas” (Otálora, en Martínez López y Frías Flores, 2023).

Conforme ganaban fuerza estos argumentos y la resistencia opositora fuera y dentro del Congreso, legisladores/as de los grupos parlamentarios comenzaron a deslindarse; este fue el caso de mujeres de MORENA, como la senadora Martha Lucía Micher que declaró que en el Senado no pasaría esa reforma patriarcal; del PRD, como la Diputada Nora Arias que exigió a su partido detener la reforma regresiva y a la que se fueron sumando figuras como Osorio Chong -quien declaró que el Tribunal ha sido clave para garantizar derechos de mujeres y grupos vulnerables- e incluso Alejandro Moreno quien declaró que no apoyarían la iniciativa de reforma constitucional.

La propuesta, que ya tenía antecedentes en el “plan b,” claramente vulneraba el modelo de tutelaje de los derechos político-electorales y la propia definición de los partidos como entidades de interés público, que, como se planteó, en tanto reciben dinero del Estado deben estar regulados y vigilados. Lo que también se puso en evidencia fue, de nuevo, la utilización de una estrategia de “Genderwashing” y también “pinkwashing” (contra la comunidad LGBT+) que justifica una propuesta regresiva desde el punto de vista de los derechos político-electorales con argumentos aparentemente democráticos de la autonomía de los partidos y del principio de separación de poderes. De haber entrado en vigor, el “plan b” y la iniciativa de reforma del TEJF hubieran cambiado los principios de relación entre las

autoridades electorales y los partidos y los acuerdos en materia de representación política; hubieran erosionado la democracia.

Las colectivas como piezas clave de oposición

Una de las figuras clave para detener los intentos de reforma electoral fueron, sin lugar a dudas las colectivas feministas; éstas actuaron de diversas formas, ya sea cabildeando con los coordinadores parlamentarios opositores en el caso del “plan b” o bien con las mujeres dentro de los partidos políticos cuando se intentó hacer la reforma constitucional del TEPJF. El trabajo que realizaron fue estratégico dando a conocer las propuestas y explicando por qué éstas representaban un atentado a los derechos ganados, como el de la igualdad para las mujeres en la representación política y las afectaciones para las cuotas de grupos en situación de discriminación; también publicaron artículos en los medios de comunicación, dieron entrevistas, hicieron *spaces* en la entonces red social Twitter, juntaron firmas para peticiones y recurrieron al litigio estratégico para detener las iniciativas en el poder judicial.

Mujeres en Plural (MP) fue una de las colectivas más importantes en este proceso de defensa de la democracia. El colectivo formado en el año de 2009 conjunta a mujeres políticas, académicas, funcionarias, activistas, periodistas, militantes de todos los partidos políticos, etc. (Cimac Noticias, 2019) cuyo fin común es proteger y promover los derechos políticos de las mujeres. Gracias a sus aportaciones, México es el país con más avances legislativos a favor de la igualdad política, como la aprobación de la paridad como principio constitucional (de acuerdo a las reformas de 2014 y de 2019) y el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género (2020).

Por ello, la presente investigación consideró relevante entrevistar a algunas de sus integrantes. Realizamos tres entrevistas a profundidad vía virtual con Angélica de la Peña, Patricia Olamendi y Amalia García¹¹, ésta última también se desempeña como diputada federal de la presente legislatura por lo que su testimonio fue crucial para reconstruir los procesos de pesos y contrapesos en el proceso de discusión de las reformas. Nos centramos sobre todo la actuación de la colectiva en la última reforma, la que proponía una reforma constitucional al TEPJF y que, en sus propias palabras, fue la más compleja de detener porque

¹¹ Las entrevistas se realizaron vía zoom los días 15 de agosto, 18 de agosto y 19 de agosto de 2023 respectivamente.

había sido apoyada por las coordinaciones de seis de los siete partidos políticos. Los temas de las entrevistas se centraron en las siguientes preguntas: ¿Cómo conocieron la propuesta de modificación del TEPJ? ¿Cuáles fueron las estrategias dentro de Mujer en Plural para detener dicha iniciativa? ¿Cómo se logró convencer al resto de legisladoras de que la reforma al TEPJF restringía los derechos ganados? ¿En la cámara de diputados y diputadas cuáles fueron las estrategias que se formaron al interior para bloquear la reforma y cómo se vincularon si es que lo hicieron con las personas representantes de Acción Afirmativa? ¿Hubo costos para las legisladoras que no apoyaron esta iniciativa? ¿Qué se perdía para la democracia en México si se aprobaba la reforma al TEPJF? y finalmente ¿Qué puede enseñar el movimiento amplio de mujeres de México al resto de las democracias que están a prueba por intentos de erosión democrática? La información obtenida nos permitió reconstruir las estrategias de redes de mujeres para detener las reformas regresivas en materia democrática.

La comunicación interna para difundir la reforma al TEPJF

El mecanismo comunicación más importante que tiene Mujeres en Plural con todas las integrantes es un chat de WhatsApp. El 27 de marzo de 2024 se alertó de la reforma al TEPJF con un mensaje que decía lo siguiente “dicen que esta iniciativa la apoyan todos los partidos, excepto MC y nos pega directamente en la paridad”, también se compartió una primera nota periodística de Milenio titulada “Diputados de Morena y oposición buscan limitar al TEJF por “exceso de facultades”; fue así que la red se activó para dar seguimiento al tema con las propias diputadas que son parte de la colectiva y quienes tienen una vinculación importante con el Congreso. Otra integrante propuso elaborar un comunicado y hacer una conferencia de prensa para dar a conocer las implicaciones de dicha reforma, en tanto, una más realizó el primer borrador con un posicionamiento que se dio a conocer en las redes sociales de MP titulado “No al retroceso de los derechos políticos y electorales de las Mujeres” (Twitter , 2023)

Posterior a ello, participaron en entrevistas de radio, tv, escribieron artículos de opinión en diferentes medios donde señalaron puntualmente que la autodeterminación de los partidos políticos no podía estar por encima de los derechos políticos y electorales. En la entrevista realizada Angélica de la Peña, Patricia Olamendi y Amalia García coincidieron en que la propuesta era producto de las últimas decisiones del TEPJF quien había mandato el

cumplimiento de la paridad, le había corregido la plana a la cámara de diputados sobre todo en las prácticas excluyentes y violatorias de derechos.

“La ortodoxia arcaica ha ido cambiando conforme el poder judicial ha asumido su carácter constitucional no sólo de equilibrio frente a los otros dos poderes, sino también como resguardo de la Constitución, por eso estaban tan enojados los señores y proponían esa reforma que atentaba contra los derechos ganados; en una reunión que se filtró a los medios que los Magistrados les dijeron a los diputados que ellos hacían lo que la ley establecía que si no estaban de acuerdo modificaran la ley y pues les tomaron la palabra” Angélica de la Peña.

En el mismo sentido Patricia Olamendi consideró que a los partidos políticos les debe quedar claro que son entidades de interés público por lo tanto su actuación está en el escrutinio público y que tienen una responsabilidad con la ciudadanía “El Artículo 1 Constitucional mandata la progresividad de los derechos humanos; el TEPJF ha actuado en consecuencia, no se trata de una extralimitación como se señala en la exposición de motivos de la reforma; a todas luces era una reforma que atentaba contra los derechos humanos, frenaba el avance de la igualdad y la paridad”.

En cuanto empezó a conocerse más sobre los alcances de dicha reforma, diferentes diputados y diputadas se manifestaron en contra de su aprobación; muchos y muchas de éstos se habían sido beneficiado de las propias sentencias del TEPJF, tal como lo señaló Amalia García en la entrevista realizada. “Una de las diputadas indígenas de Morena, que fue de las principales opositoras, mencionó que precisamente una sentencia del TEPJF había hecho que ella continuara con la candidatura y pudiera acceder a una curul; lo mismo otros diputados de diferentes partidos. Cuando me tocó mi participación en tribuna expuse los riesgos de no contar con pesos y contrapesos, hablé de Montesquieu y les recordé que la literalidad de las normas siempre ha afectado a las mujeres como pasaba con el voto antes de ser reconocidas como ciudadanas. Para mi sorpresa cuando terminé mi intervención las y los diputadas y diputados me aplaudieron, muchos de ellos de Morena”, Amalia García.

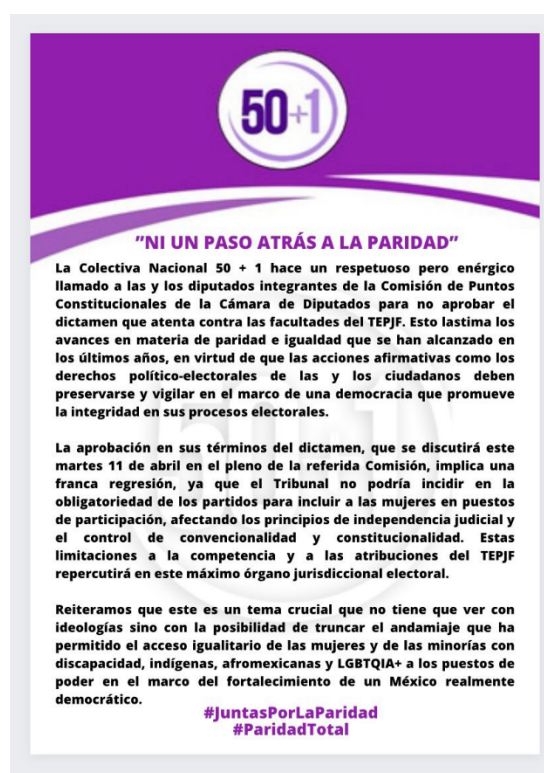
Cuando el descontento empezó a crecer los autores de la reforma constitucional, es decir los coordinadores parlamentarios de PAN, PRI, PRD, PT, PVEM y Morena emitieron un comunicado donde rechazan que su iniciativa afectara al TEPJF, las acciones afirmativas y la paridad (Ortiz Juan, 2023); no obstante el descontento con el intento de reforma siguió

creciendo, poniendo énfasis en el retroceso democrático que representaba su aprobación al punto de que fue imposible sostenerla.

Se muestran a continuación algunas de las infografías que difundió Mujeres en Plural, y el Colectivo 50+1 como parte de su estrategia para detener esta reforma:

Imágenes 1 y 2

Infografía creada por Mujeres en Plural sobre los riesgos de la reforma constitucional que limitaba las competencias del TEPJ, Cártel realizado por 50+1 para denunciar la reforma al TEPJF



Fuente: (Mujeres en Plural, 2023) (50+1, 2023)

Respecto de los costos de la rebeldía al no apoyar la reforma antes mencionada, las entrevistadas coincidieron en que se intentó presionar a las diputadas por diferentes medios; uno de ellos fue la amenaza de no darles la candidatura en el siguiente proceso electoral, recordemos que en México actualmente existe la reelección para diputaciones, por lo que este mecanismo de rendición de cuentas se utilizó en este contexto para presionar a las

diputadas políticamente; aun así, las diputadas no cedieron y fueron quienes primero y en su mayoría alzaron la voz.

Uno de los hallazgos relevantes de las entrevistas es que las entrevistadas coinciden en que no hubo una alianza estratégica entre el movimiento amplio de mujeres y los grupos en situación de discriminación. Patricia Olamendi mencionó que la estrategia de MP fue hablar directamente con los coordinadores parlamentarios de los partidos para advertirles sobre las implicaciones que tendría esta reforma.

éstos actuaron por separado, lo que puede explicarse por ser la primera legislatura con cuotas para diferentes grupos por lo que la curva de aprendizaje de las coaliciones estratégicas para sumarse a causas en común puede empezar a construirse a partir de esta experiencia. De hecho, Amalia García mencionó en la entrevistas que diferentes colectivos de estos grupos fueron importantes para detener la “contrareforma”, así que es previsible que el futuro actuará de manera conjunta.

Finalmente les preguntamos a las entrevistadas qué podía enseñar el movimiento amplio de mujeres de México al resto de las democracias que están a prueba por procesos de autocratización y hubo coincidencia en que los cambios legales se han conseguido dejando de lado las diferencias ideológicas para temas estratégicos. Para Amalia García, una de las enseñanzas es que en México, las feministas y mujeres han formado un “triángulo de hierro”, un alianza entre mujeres políticas, redes y organizaciones de la sociedad civil y académicas. Otra lección del caso mexicano es la aprobación de la paridad como principio constitucional porque ello ha significado la llegada masiva de mujeres a espacios de toma de decisiones lo que transforma a las instituciones e impulsa agendas para proteger los derechos de las mujeres y los embates del actual gobierno al sistema democrático y paritario.

Conclusiones

La experiencia de reformas electorales que tuvieron lugar en México entre 2022 y 2023 fueron sin lugar a dudas una prueba para la democracia, y en particular para la democracia paritaria, que costó muchos años construir. La reforma constitucional, el “plan b” y la iniciativa de reforma constitucional que pretendía modificar las competencias y alcances del

TEPJF, tenían como intención, no explícita, de fortalecer la discrecionalidad en la toma de decisiones de los partidos políticos sobre todo en la postulación de candidaturas.

No obstante, estos escenarios también dejaron ver que el sistema de pesos y contrapesos funciona en el país, primero, al activarse el freno con un gobierno dividido, posteriormente con la división de poderes y la todavía independencia de la SCJN que declaró graves violaciones al proceso legislativo y anuló ambas partes del “plan b”, y, posteriormente, con la rebeldía de algunas diputadas y diputados que se opusieron al intento por limitar la facultad interpretativa del TEPJF y la reducción de cuotas para grupos en situación de discriminación. En estos procesos resultó fundamental la presencia de colectivas feministas que los temas en la agenda política, organizaron mediante diferentes estrategias a la oposición a estas reformas, cabildaron al interior del congreso y recurrieron al litigio estratégico para detener estos intentos de violación a los derechos humanos.

Ante los intentos del actual gobierno de erosionar el sistema democrático, hubo respuestas institucionales, sociales y partidistas para evitarlo lo cual es una enseñanza del caso mexicano para el resto de democracias que atraviesan los mismos retos para mantener estándares mínimos de autonomía de las instituciones electorales, respeto a los derechos políticos y electorales de las mujeres y de otros grupos en situación de discriminación. La amplia alianza de mujeres que se articula con diferentes colectivas feministas ha sido fundamental para frenar los intentos de instauración de un régimen autoritario que busca, argumentando la autonomía de los partidos políticos, imponer las reglas de los hombres que siguen tomando las decisiones al interior de los partidos que están inconformes con la paridad porque ello representa una pérdida de espacios de poder. Los derechos humanos, las instituciones democráticas y la paridad no están garantizados de una vez y para siempre.

Bibliografía

Aguilar, Aguilar, A. (2022). Democracia y derechos políticos en las sentencias del TEPJF. *Analysis plural* 1(2), 1-4.

Bjarnegård, E. y Zetterberg, P. (2023, abril 18). Gendwasing o Genderbashing? Reconciling the different faces of modern autocrats. *The Loop. EPCR's Political Science, Blog 8 in a Loop Thread on Gendering democracy*. Recuperado de <https://theloop.ecpr.eu/genderwashing-or-genderbashing-reconciling-the-different-faces-of-modern-autocrats/>

Beltrán, Y. (2023). El Plan B: un enfoque desde la inclusión. *Brújula Ciudadana*. Recuperado de <https://www.revistabrujula.org/b146-plan-b-enfoque-desde-linclusion>.

Boese, V. A., et.al. (2021). How democracies prevail: democratic resilience as a two-stage process. *Democratization*, 28 (5): 885-907.

Cimac Noticias. (28 de Octubre de 2019). *Mujeres en Plural, una década sorora*. Obtenido de <https://cimacnoticias.com.mx/2019/10/28/mujeres-en-plural-una-decada-sorora/#gsc.tab=0>

COLEFOM (30 de marzo de 2023). Manifiesto. Recuperado de Downloads/Manifiesto%20COLEFOM%20sobre%20iniciativa%20de%20reforma%20mar-30-23%20(1).pdf

Dina, E. (11 de abril de 2023). El Tribunal Electoral no se toca, advierte diputada trans de MORENA ante discusión de reforma regresiva. *El Universal*. Recuperado de <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/me-parece-un-discurso-hipocrita-diputadas-trans-de-morena-difieren-sobre-reforma-al-tribunal-electoral/>

El Financiero. (14 de diciembre de 2022). *Reforma electoral: Adela Ramos, diputada de Morena que votó en contra, denuncia persecución*. Obtenido de <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/13/reforma-electoral-adela-ramos-diputada-de-morena-que-voto-en-contra-denuncia-persecucion/>

El País. (22 de Junio de 2023). *La Suprema Corte asesta el golpe final y anula por completo el "plan B" electoral de López Obrador*. Obtenido de <https://elpais.com/mexico/2023-06-22/el-supremo-asesta-el-golpe-final-y-anula-por-completo-el-plan-b-electoral-de-lopez-obrador.html>

El Universal. (7 de diciembre de 2022). *Diputada Trans denuncia "regresión" en Plan B de Morena*. Obtenido de <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputada-trans-denuncia-regresion-en-plan-b-de-morena/>

Expansión. (11 de Abril de 2023). *Rebelión de diputados aplaza de nuevo dictaminación de reformas al TEPJF*. Obtenido de

<https://politica.expansion.mx/mexico/2023/04/11/rebelion-de-diputados-aplaza-de-nuevo-dictaminacion-de-reformas-al-tepjf>

Freidenberg, F. y Dosek, T. (2022). *Reformas electorales en América Latina*. Ciudad de México: IIJ-UNAM e IECM

Gaceta Parlamentaria. (2022). Cámara de diputados LXV Legislatura. (<http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/dic/20221206-C.pdf#page=2>)

Gaceta Parlamentaria. (6 de diciembre de 2022). *Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia electoral*. Obtenido de <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/dic/20221206-C.pdf#page=2>

Gama, L. (11 de abril de 2023). La reforma constitucional encaminada a contener al Tribunal Electoral. *Nexos*. Recuperado de <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-reforma-constitucional-encaminada-a-contener-al-tribunal-electoral/>

Gamboa, L. (2022). *Resisting Backsliding: Opposition Strategies against the Erosion of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

García, Carina (2023). Rebelión de diputados aplaza de nuevo dictaminación de reformas al TEPJF. *Expansión Política* (<https://politica.expansion.mx/mexico/2023/04/11/rebelion-de-diputados-aplaza-de-nuevo-dictaminacion-de-reformas-al-tepjf>).

Martínez López, C. y Frías Flores, S. (2023). La iniciativa de reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. *Mirada Legislativa* 236. Senado de la Republica/Instituto Belisario Domínguez.

Mujeres en Plural. (13 de Abril de 2023). *Twitter*. Obtenido de <https://twitter.com/mujeresplural/status/1646503950584016902?s=48&t=LwWOcNAd5XEGtCRiT3-u6w>

Ortiz Juan. (13 de Abril de 2023). *Twitter*. Obtenido de https://twitter.com/Juan_OrtizMX/status/1646637300992864258

Pérez-Liñán, A. y Pagés E. (2022). Democratic Backsliding and Authoritarian resurgence in Latin America. *Kellogg Institute*. Recuperado de <https://www.norc.umd.edu/content/dam/norc-org/pdfs/Democratic%20Backsliding%20Panel%20-%20Two-pager%20-%20English.pdf>

Presidencia . (28 de abril de 2022). *Ejecutivo federal envía hoy iniciativa de reforma constitucional en materia electoral: presidente*. Obtenido de <https://www.gob.mx/presidencia/prensa/ejecutivo-federal-envia-hoy-iniciativa-de-reforma-constitucional-en-materia-electoral-presidente>

Przeworski, A. (2019). *Crises of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Renwick, A. (2010). *The politics of electoral reform: Changing the rules of democracy*. Cambridge University Press.

Senado. (22 de febrero de 2023). *Acuerdo por el que se remite al Ejecutivo Federal el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia electoral*. Obtenido de <https://www.senado.gob.mx/65/votacion/4305>

Somer, M., McCoy, J. L. y Luke E, R. (2021). Pernicious polarization, autocratization and opposition strategies. *Democratization*, 28(5): 929-948.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2023). “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2023 Y SUS ACUMULADAS 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 Y 93/2023. Ministro ponente Javier Laynez Potisek”. (https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2023-06/A.I.%2071.pdf)

Twitter . (27 de Marzo de 2023). Obtenido de <https://twitter.com/MujerEsPlural/status/1640526598297247747>

Vázquez Piñón, M. y Vázquez Correa, L. (2021). La democracia plural: acciones afirmativas para las elecciones de 2021. Recuperado de <https://www.animalpolitico.com/analisis/invitades/la-democracia-plural-acciones-afirmativas-para-las-elecciones-de-2021>

Zovatto, D. (2018). *Reforma político-electoral e innovación institucional en América Latina (1978-2016)*. Ciudad de México: Tirant lo Blanch y TEPJF.